

George W. Bush: entre su legado y Katrina

Soraya Castro Mariño

Investigadora del Centro de Estudios sobre Estados Unidos (CESEU) de la Universidad de La Habana

Los Estados Unidos de América se encuentran profundamente divididos, lo cual contrasta con el sentido de unidad después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001.¹ La victoria de George W. Bush en las votaciones de 2004 provocó un equivocado triunfalismo por parte del Presidente electo, el cual inicia su segundo período concentrado en fortalecer la agenda conservadora con el fin de vigorizar el legado histórico de su Administración. El hecho de que el Comandante en Jefe de una “nación en guerra por opción” lograra en las urnas su selección fue interpretado como una carta blanca a su capacidad de liderazgo y a su estilo de hacer política derechista, incluidos el uso de la manipulación, el miedo y las mentiras.

La mayoría en el voto popular, la superioridad republicana en ambas cámaras del Congreso, la victoria en la Florida y Ohio, y el triunfo en la generalidad de los estados de la Unión en el ámbito federal y estadual en los comicios de 2004 le sirvieron a Bush de justificación ideológica bajo el manto de un “mandato superior en nombre de Dios” para continuar su política con mayor violencia y radicalismo.

En consecuencia, el presidente Bush, con una lectura maximalista de lo que llamó el “capital político” ganado en las urnas, propuso asegurar, mediante la amenaza o uso de la fuerza, la prioridad de consolidar su estrategia de hegemonía mundial a favor de las guerras preventivas para provocar “cambios de regímenes”. Tal precepto que se escuda a la sombra de la cruzada contra el terrorismo es una guerra agresiva a favor de ambiciones imperiales entre los que se fusionan la contienda por el petróleo, los mercados financieros y la seguridad de las fronteras.

En materia de política exterior, la lógica neoconservadora se ha justificado a través del “destino manifiesto” con el fin de llevar la globalización y la democracia americana al mundo, como muro de contención a las amenazas de política exterior y de seguridad estadounidense y en respuesta a las endógenas y exógenas “fuerzas del mal”.

Al mismo tiempo, Bush declaró como sus prioridades de política doméstica la privatización del seguro social, aumentar los gastos militares, disminuir los costos sociales y asegurar los valores morales conservadores. Para la Administración

¹ En los comicios presidenciales de 2004, a nivel del Ejecutivo, George W. Bush fue electo con el 50, 94% del voto popular y 286 electorales al puesto más importante de un sistema político de carácter presidencial. En el ámbito federal, el 46% (101 839 716) de los ciudadanos con edad al sufragio no asistió a las urnas, mientras que un 48, 10% de los que participaron votó contra Bush. Más de la mitad de la población estadounidense no apoyó al Presidente en funciones, lo que refleja que no tiene un “mandato”.

republicana fue rector el principio del federalismo dual. Acorde con el mismo, se debe minimizar el papel del estado-nación como redistribucionista de la riqueza nacional, y, por ende, limitar al máximo el gasto social, lo cual provoca que el estado federal se distancie cada vez más de los problemas acuciantes de la sociedad norteamericana, a ser resueltos por los mecanismos del mercado.

A la sazón, parecía que el guión derechista caminaba casi sin grandes tropiezos, y que perduraría en el debate público la herencia militarista-hegemónica de irresponsabilidad social, cuando lo advertido se convirtió en imprevisible ante un fenómeno atmosférico: Katrina, el cual abatió las bases tanto de la política externa, de seguridad como doméstica del gobierno de Bush.

El huracán volvería a poner en la mesa de discusión temas impostergables para la definición no solo de la hegemonía de los Estados Unidos en un nuevo mundo cambiante, sino de la restructuración del estado-nación en su particular relación estado-sociedad.

Katrina hizo retornar la interrogante sobre la viabilidad gubernativa de mantener una línea de corte conservador extremo, capaz de enfrentar los retos que los Estados Unidos como nación están afrontando. En esencia, estos desafíos contemplan la incertidumbre sobre su papel de superpotencia dominante, los problemas de una débil sociedad multicultural y multirracial, marcada por profundas divisiones clasistas y la duda sobre la capacidad de elevar el nivel y la calidad de la vida en un mundo cada vez más interdependiente y globalizado, que trata de excluir al hombre del centro vital.

Expansión del concepto de “guerra permanente antiterrorista” a la llamada “lucha contra las tiranías”

En el discurso de toma de posesión del presidente George W. Bush del 20 de enero de 2005 se destacó una idea que ajusta la llamada “doctrina Bush” al criterio de que la “supervivencia de la libertad en los Estados Unidos dependerá del triunfo de la libertad en países con gobiernos tiránicos” y que, por ello, su gobierno “dedicará los próximos cuatro años a la promoción de la democracia en el mundo”.²

El llamado nuevo “capital político” fue utilizado en los primeros meses del segundo período presidencial de la manera más agresiva y fuera de la ley que sea posible imaginar. Resultó la legitimidad del origen electoral para un empleo abusivo del poder. Así, el 20 de enero de 2005, Bush anunció que los Estados Unidos “promoverá movimientos democráticos en cada nación y cultura, con el fin último de terminar con la tiranía en nuestro mundo” (...) “Nos defenderemos a nosotros mismos y a nuestros amigos por la fuerza de las armas, si fuese necesario. La influencia de los Estados Unidos no es ilimitada, pero afortunadamente para los

² “Text of Bush's inaugural speech”, *El Nuevo Herald*, Thursday-January 20, 2005.

oprimidos nuestra influencia es considerable, y la usaremos confiadamente por la causa de la libertad”.³ En otras palabras: la doctrina Bush expande ahora el concepto de guerra permanente antiterrorista también a la llamada “lucha contra las tiranías”, como elemento justificativo de su intervencionismo.

La motivación inmediata de la política exterior guerrerista del Imperio resulta una visión bélica abstracta y peligrosa: la llamada “causa de la libertad”. Esta ya ni siquiera precisa la construcción de pretextos o la existencia objetiva y subjetiva de amenazas emergentes no inminentes, como subterfugio para ejercer acciones preventivas. La narrativa estadounidense del poder hegemónico en la escena internacional resulta una retórica moralizante idealista de la necesidad de “cambio de regímenes” para preservar y defender la libertad y la democracia, aunque en su base doctrinal imperen consideraciones geoeconómicas y geopolíticas.

En la ideológica agenda del actual mandatario norteamericano, las naciones que deben ser objeto de presión y, llegado el momento, de acción directa han sido designadas como “Avanzadas de las Tiranías”.⁴ En este sentido, en la audiencia de confirmación de Condoleezza Rice como Secretaria de Estado, los estados expresamente nombrados son: Irán, Corea del Norte, Birmania, Cuba, Zimbabwe y Bielorrusia.⁵ Se debe, además destacar la atención creciente que en el discurso político de este segundo período presidencial se le ha prestado a la “Revolución Bolivariana” de Venezuela.

En cuanto a los aliados, la propia Condoleezza Rice ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado declaró en un estilo Wilsoniano, que contrasta con el realismo al cual dedicó su enseñanza durante los años en la Universidad de Stanford, que: “...se debe utilizar la diplomacia americana para ayudar a crear un balance de poder en el mundo que favorezca a la libertad”, lo cual ha sido denominado como diplomacia transformacional.⁶

Sobre el particular, en este diseño de política exterior y de seguridad de la Administración Bush se acentúa en términos prácticos la aplicación de un doble rasero. Este retoma los principios fundamentales esbozados desde 1979 por Jeanne Kirkpatrick en la revista *Commentary*, a pesar de las diferencias del actual contexto histórico.⁷ Entre ellos se plantea que los Estados Unidos cuando convenga a sus

³ *Ibíd.*

⁴ Hearing of the Senate Foreign Relations Committee. Subject: The Nomination of Condoleezza Rice To Be Secretary Of State Chaired By: Senator Richard Lugar (R-In) 216 Hart Senate Office Building, Washington, D.C., Tuesday, January 18, 2005.

⁵ *Ibíd.*

⁶ *Ibíd.*

⁷ Jeanne Kirkpatrick, “Dictatorships and Double Standards”, *Commentary*, November 1979, pp.34-45. En el citado artículo escrito en plena guerra fría, y con el objetivo de minimizar el esfuerzo político en cuanto al tema de derechos humanos de la Administración Carter, la autora definía el tratamiento que se debía aplicar a los llamados regímenes totalitarios, vinculados al entonces Campos Socialista, y a los regímenes autoritarios, ideológicamente cercanos a los Estados Unidos.

intereses, debe mantener con sus aliados regionales magníficas relaciones, aunque sus regímenes políticos no sean precisamente democráticos.⁸ La readecuación de esta fórmula fue valorada por el neoconservador Charles Krauthammer en la revista *Time* en el 2002.⁹ En su artículo, él planteaba expresamente: “...¿(Significa que) No se debe hacer nada para promover la democracia en las dictaduras amistosas? No. Esto simplemente indica que en lugares como Irán, los Estados Unidos debe presionar por la democracia, provocando un cambio de régimen, mientras que en las dictaduras amistosas debemos impulsar la democracia, hasta el punto que no se cree un clima de inestabilidad...”¹⁰

La expansión de la democracia y el caso *test* del “Medio Oriente Ampliado y África del Norte”, a partir de la experiencia en Irak, es inconsistente con los llamados principios de libertad que proclama el gobierno estadounidense en esa región. Ella se caracteriza precisamente por regímenes monárquicos y autocráticos, pero aliados regionales estratégicos. Su punta de lanza, Irak, podría devenir en su gran fracaso de política exterior, y probablemente en contradicciones e incoherencias con repercusiones muy negativas a corto y mediano plazo para los intereses de los Estados Unidos en la arena internacional.

Dada la magnitud de los problemas encontrados en la intervención, ocupación y la llamada “reconstrucción” de Irak, —donde después de las elecciones de enero de 2005 se ha puesto una vez más en entredicho la teoría democratizadora del “Medio Oriente Ampliado y África del Norte” por las dificultades en crear un gobierno de tránsito primero, redactar y aprobar una nueva constitución después, y el aumento en paralelo de la resistencia— se podría presumir que los Estados Unidos no se encuentra en condiciones de emprender una nueva acción violenta en otra parte.

No obstante, su variado arsenal de instrumentos de política exterior y militar es de tal magnitud que más temprano que tarde, alguno de los países que componen la llamada “Avanzada de las Tiranías”, se podría ver envuelto en un conflicto directo o encubierto con los Estados Unidos. El uso de las financiadas oposiciones internas de estos países se convierte en elemento vertebrador para la “democratización forzosa”, a tenor con la doctrina de los “cambios de regímenes” del Imperio.

En materia de política exterior, las propuestas y puntos de partida de esta segunda Administración Bush han tendido a moverse aún más a la derecha, incluso hacia un extremo conservador que pudiera rebasar el espectro político histórico-tradicional de los Estados Unidos.¹¹ Esto, paradójicamente, pudiera convertirse en una de sus

⁸ *Ibíd.*

⁹ Charles Krauthammer, “Dictatorships and Double Standards (America’s goal of spreading democracy must recognize the realities of friendly dictatorships)”, *Time*; September 23, 2002.

¹⁰ *Ibíd.*

¹¹ Acorde con una encuesta de *US News and World Report*, ya a inicios de junio de 2005, el 60% de los encuestados se oponían a una privatización de la seguridad social, el 70% de los moderados estaban en desacuerdo con la posición del Presidente en cuanto a negar el financiamiento para las investigaciones

mayores debilidades al alienarse del “*mainstream*” americano, tal cual ocurrió después de 1994 cuando Newt Gingrich trató de forzar los pilares tradicionales a través del “Contrato con América”, el cual terminó en un fracaso, la renuncia del *Speaker* y la relección de William J. Clinton en 1996.

La característica idealista e ideologizante de las propuestas del actual movimiento neoconservador que ambicionan la hegemonía unilateral y multifacética de los Estados Unidos en el escenario internacional pudiera llevar implícita costos trascendentales en la consecución de los objetivos de la política exterior y de seguridad de ese país a corto y mediano plazo, lo cual pudiera poner en peligro las bases imperiales de su proyección de dominación en el conocido hasta el momento sistema de relaciones internacionales.

Tal situación pudiera realzar contradicciones entre las propias filas republicanas, e incluso dentro del propio Ejecutivo. Los republicanos tradicionalistas consideran que sus prácticas multilateralistas, basadas en el realismo político y el pragmatismo, que han servido de contrapeso a las recomendaciones altamente ideologizadas, de carácter mesiánico y en ocasiones fundamentalistas, —que pretenden aplicar a toda costa los esquemas políticos, económicos y culturales de la sociedad norteamericana a escala global— han sido secuestrados por los neoconservadores, nucleados alrededor de Bush.¹² Sus críticas van dirigidas a la incapacidad de los neoconservadores de actuar sin considerar en última instancia las realidades del balance objetivo de fuerzas, las capacidades reales de los Estados Unidos y de los países a los que se le pretende aplicar dichas políticas, y sin un cálculo equilibrado de consideraciones respecto a los métodos a través de los cuales se debe hacer avanzar los intereses estratégicos del país.

El militarismo enraizado en un Estado autocrático

La intención de consolidación del proyecto de dominación internacional de los Estados Unidos desde una perspectiva neoconservadora se justificó mediante la conversión de la causa de la libertad en el exterior, como prioridad de la seguridad interna, vista esta última desde una restringida concepción que básicamente prestaba solo atención a las llamadas amenazas asimétricas provenientes del extranjero. Al mismo tiempo, subrayó la utilización de un conjunto de esfuerzos, encaminados a asegurar amplios márgenes de maniobra, para garantizar la ejecución de la política preventiva al abrigo de un Estado de seguridad nacional paralelo, cimentado en el poderío militar-policial de carácter represivo.

federales de las células madres, el 82% objetó la intrusión republicana en el caso de Terri Schiavo, y existía ya, incluso antes de Katrina, una preocupación creciente relacionada al abandono del papel del Estado en los temas sociales y laborales, así como con respecto a la erosión del medio ambiente. Véase Mortimer Zuckerman, “Right Down the Middle?”, *U.S. News & World Report*, June 6, 2005.

¹² William Schneider, “Repackaging the Message”; *National Journal*, January 29, 2005, p 318.

En el contexto del clima antiterrorista de un “país en guerra” y la utilización del miedo como instrumento político, se han engendrado drásticas variaciones en las estructuras del Estado norteamericano en un inquietante ambiente de normalidad ante la incompetencia de sectores sociopolíticos importantes, pero también en un entorno de gran arbitrariedad contra el cual los demócratas en el Congreso resultaron totalmente ineficaces.

Como resultado, se observa la mayor reestructuración del estado-nación norteamericano en los últimos 50 años. Se destacan las instituciones más vinculadas a la función represiva del Estado, particularmente, las entidades ejecutivas, relacionadas al proceso de conformación de la política exterior y de seguridad, como son el Departamento de Seguridad Interna, Defensa, Estado, Tesoro, Comercio y las 15 agencias de la Comunidad de Inteligencia, cuyo pináculo es simbolizado con la creación de un nuevo cargo: El Director Nacional para la Comunidad de Inteligencia.¹³

A todos los niveles del sistema político norteamericano se han producido grandes transformaciones estructurales acorde con la doctrina de la llamada “lucha global contra el terror”. Esta se entrelaza con la restricción de las libertades cívicas, el patriotismo belicista, la oscura retórica de una derecha que enjuicia de enemigos a todos aquellos que no comparten devotamente sus enfoques y la noción de que la guerra no solo es un mal necesario sino un ejercicio unilateral de afirmación nacional.

Con todo, el supuesto central de la política exterior y de seguridad del segundo período de la Administración Bush, —basado en que la “seguridad interna depende de la causa de la libertad en el exterior”— mensaje que trató de fortalecerse después de los atentados terroristas de Londres,¹⁴ estalló en pedazos ante los estragos del huracán Katrina en el sur profundo de los Estados Unidos a finales de agosto de 2005.

El siniestro, además, destrozó el angosto concepto de seguridad que imperó en los Estados Unidos después del 11 de septiembre de 2001, orientado sobre todo hacia acciones militares-estratégicas contra un intangible enemigo externo: El terror global. Para ello se viabilizaron las más significativas modificaciones del sistema político federal, el cual demostró a la hora de actuar ante un desastre natural su total ineptitud, incapacidad e irresponsabilidad.

Impulso de la agenda conservadora antes de Katrina: éxitos y escollos

¹³ Véase Soraya Castro Mariño, *Tendencias actuales de la política en los Estados Unidos*, CESEU, abril, 2005.

¹⁴ Los atentados terroristas en Londres en el metro y en el sistema urbano de transporte tuvieron lugar el 7 de julio de 2005.

La ampliada mayoría republicana en ambas Cámaras del Congreso de los Estados Unidos en este 109 período de sesiones¹⁵ brindó hasta mediados del año 2005 una mayor oportunidad al presidente George W. Bush para impulsar su conservador programa socioeconómico en función de perpetuar su legado. Entre otros proyectos, la cruzada derechista propuso más fondos a la defensa del país, amén del astronómico déficit presupuestario y comercial¹⁶ y la profundización de la reforma de los servicios de inteligencia. En el ámbito socioeconómico, se situó como meta una mayor privatización del Sistema del Seguro Social, recortes a todos los programas sociales, más reducciones de impuestos y la causa más cercana al corazón del movimiento fundamentalista religioso cristiano: La designación de jueces conservadores a la rama judicial a nivel federal y, en particular, a la Corte Suprema.

En los primeros seis meses del segundo período de gestión presidencial, el gobierno de Bush logra un saldo favorable en el avance de su conservadora gestión, a pesar de estar plagado de escándalos políticos, nuevas revelaciones de torturas en las cárceles de la ilegal base naval de Guantánamo, un creciente cuestionamiento sobre la guerra en Irak, y la percepción de una situación económica precaria con una deuda pública inmensa, profundizada con el alza de los precios del crudo en el ámbito internacional. Amerita detallar esta aseveración, tomando como puntos de partida sus prioridades públicas.

Nombramientos a los puestos clave del ejecutivo

Un éxito importante de la Administración Bush en su segundo período lo constituyó el hecho de que casi todas las nominaciones de extrema derecha a los cargos del gabinete presidencial y de la oficina ejecutiva de la Casa Blanca¹⁷ fueron ratificadas por el Senado de manera expedita, incluidas las designaciones de Condoleezza Rice como secretaria de Estado y Alberto González al frente del Departamento de Justicia.¹⁸ Ambos estuvieron vinculados de manera inescrupulosa a la construcción de pretextos para llevar a cabo la guerra en Irak. Al Fiscal General se le atribuye la autoría de un memo que descartaba la aplicación de los principios de la Convención de Ginebra en cuanto al tratamiento de los prisioneros de guerra. Conformemente, se autorizó desde la Casa Blanca la definición del régimen de

¹⁵ El 109 período de sesiones del Legislativo de los Estados Unidos abarca los años 2005 y 2006.

¹⁶ Se estima antes de Katrina que el déficit presupuestario del gobierno federal alcanzó los \$427 000 millones, mientras el comercial se valoraba en una tasa anual de 693 100 millones.

¹⁷ Véase Soraya Castro Mariño, Ob. cit.

¹⁸ 13 senadores votaron en contra de Rice, lo cual constituyó el segundo voto más negativo (Después de Henry Kissinger) en la historia de las confirmaciones de secretarios de estado en los Estados Unidos mientras que 36 senadores votaron en contra de Alberto González.

detención de interrogatorios en Afganistán e Irak, lo cual otorgó la posibilidad de perpetrar torturas en Abu Ghraib/BCCF y Guantánamo.¹⁹

La aprobación de Paul Wolfowitz como Director del Banco Mundial tampoco resulta despreciable en el análisis, sobre todo si se toma en consideración la drástica reforma que se está produciendo en el sistema de la ONU y el papel, que desde este puesto, él desempeñará para adelantar los intereses de dominación norteamericanos. La excepción la constituyó el caso de la nominación del ultraneoconservador John R. Bolton como representante de los Estados Unidos ante la ONU,²⁰ la cual inicialmente pasó a ser considerada por la totalidad del Senado, sin una propuesta positiva de aprobación por parte del Comité de Relaciones Exteriores de esa cámara legislativa.²¹ La postulación de uno de los representantes más unilateralistas en el marco de las propuestas de la reforma del sistema de la ONU quedó obstaculizada por una férrea oposición de los demócratas. Ellos utilizaron la técnica del filibusterismo y votaron dos veces en contra de cerrar el debate de esta candidatura.²² Tanto el Presidente como la Secretaria de Estado insistieron de manera obstinada en la necesidad de un voto sobre Bolton, sin evaluar la posibilidad de otro nombramiento, forzando las ya tensas relaciones con el Congreso, y demostrando un arrogante desdén hacia la Organización de Naciones Unidas en su 60 aniversario.

¹⁹ Alberto González, quien fuera el consejero legal de la Casa Blanca durante el primer período de la Administración de George W. Bush, concluyó que a los prisioneros de la guerra de Afganistán e Irak no se les tenía que aplicar la protección de las Convenciones de Ginebra ni ninguna ley de guerra. González destinó un memo al Presidente el 25 de enero de 2002, en el cual explicaba que eran legales las conclusiones de la Oficina de Consejos Legales adscrita al Departamento de Justicia y que se podían reinterpretar las regulaciones de la convención de Ginebra. Esto permitió que el Secretario de Defensa y el Secretario de Justicia aprobaran un sistema secreto de detención e interrogación que la Cruz Roja Internacional caracterizara como de flagrantes torturas. Véase A Newsweek investigation: "The Roots of Torture The road to Abu Ghraib began after 9/11, When Washington Wrote New Rules to Fight a New Kind of War"; *Newsweek*; May 17, 2004.

²⁰ Douglas Jehl y Sheryl Gay Stolberg, "Doubts on U.N. Nominee's Confirmation Are Growing"; *The New York Times*, April 21, 2005; Neil King Jr. y Christopher Cooper, "Republicans Rally Around Bolton As Bush's U.N. Pick Faces Critics"; *The Wall Street Journal*, April 21, 2005; Page A8; Farah Stockman, "In Surprise, Vote on Bolton Delayed. GOP Senator Asks to Hear More"; *Boston Globe*, April 20, 2005.

²¹ Barry Schweid, "Panel Sends Bolton Nomination to Senate"; *AP*, Thursday May 12, 2005; Sonni Efron y Mary Curtius, "Divided Panel Passes Bolton to Full Senate Committee Withholds its Recommendation After a Republican Member Rebukes Bush's Choice for U.N. Envoy. But Confirmation is Likely"; *Los Angeles Times*, May 13, 2005, Joseph Schuman, "Bolton Nomination Advances, But Just; *The Wall Street Journal*; May 13, 2005.

²² Para profundizar véase a Joseph Schuman, "Bolton Nomination Still Stuck In Rancorous Washington", *Wall Street Journal*, June 21, 2005. Charles Babington, "Senate Democrat Offers Pledge on Bolton Vote", *Washington Post*, Thursday, June 23, 2005; p.A04. Jim VandeHei, "Bush to Keep Pressing for Bolton Vote. Frist Says His Role Has Been 'Exhausted' but Softens Position After Talk With President", *Washington Post*, Wednesday, June 22, 2005; p. A10.

Durante el debate y las audiencias de confirmación de John Bolton, los demócratas, reclamaron al Ejecutivo la entrega al Senado de documentos para evaluar su idoneidad para el cargo.²³ El cuestionamiento a la candidatura de Bolton resultó solo la punta del iceberg en cuanto a poner al descubierto la manipulación de la información por parte de la Administración Bush para la consecución de los objetivos de la política exterior.²⁴ Bolton fue acusado en el Congreso de los Estados Unidos de utilizar indebidamente información clasificada para forzar análisis que no se correspondían con las conclusiones de la inteligencia norteamericana,²⁵ así como el ejercicio sistemático de abusos de poder hacia sus subalternos durante el período en que fue subsecretario para el control de armamentos en el Departamento de Estado.

Finalmente el 1 de agosto de 2005 durante el receso congresional, el Presidente Bush decidió otorgarle a John Bolton un nombramiento temporal como

²³ A nivel del pleno del Senado, los demócratas insistieron en que la Casa Blanca entregase el borrador de un discurso que Bolton estaba preparando sobre el estado de los programas sirios de armamentos, el cual demostraría que Bolton trató de exagerar el acceso de Siria a armas de destrucción masiva. También solicitaron una lista de 19 nombres de funcionarios y empresas norteamericanas que Bolton pidió en relación con interceptaciones secretas que la Agencia de Seguridad Nacional había hecho de sus comunicaciones. Véase Sheryl Gay Stolberg, “Democrats Block a Vote on Bolton for the Second Time”, *The New York Times*, June 21, 2005.

²⁴ Durante las audiencias de confirmación de Bolton en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado salió que el 6 de mayo de 2002, pocos días antes de la visita del ex presidente Jimmy Carter a Cuba, Bolton declaró ante una audiencia de la conservadora Heritage Foundation: “Estados Unidos cree que Cuba dispone al menos de un programa limitado de investigación y desarrollo de armas biológicas ofensivas”. Luego del discurso en la Heritage Foundation, dos analistas —uno del Departamento de Estado y otro de la Agencia Central de Inteligencia (CIA)— advirtieron que no existía información de inteligencia verificada que sustentara la afirmación del Subsecretario de Estado. Ahora se sabe que el ex Subsecretario no solo sacó conclusiones sin fundamento de los datos suministrados, sino que aparentemente trató de que fueran despedidos los dos analistas que cuestionaron sus afirmaciones, aunque afirmó que se limitó a pedir el traslado de los analistas, puesto que ambos habían perdido su confianza. No se tomó acción alguna en contra de ellos. Véase Douglas Jehl, “Tug of War: Intelligence vs. Politics”, *The New York Times*, May 8, 2005. Douglas Jehl, “Rice’s Reason for Withholding Bolton Files: A Chilling Effect”, *The New York Times*, May 9, 2005. Mary Curtius, “For 3 GOP Senators, Vote Isn’t Just About U.N. Pick”, *The Nation*, May 10, 2005. Douglas Jehl, “U.N. Nominee Asserts His Independence on Intelligence”, *The New York Times*, May 12, 2005. Douglas Jehl, “Senate Panel Opens Hearing on Bolton Nomination” *The New York Times*, May 12, 2005. CQ: Senate Foreign Relations Committee Hearing on Bolton. *Text of the U.S. Senate Committee on Foreign Relations hearing on the nomination of John Bolton, as provided by Transcriptions, Inc*, May 12, 2005. Sonni Efron y Mary Curtius, “Divided Panel Passes Bolton to Full Senate. Committee Withholds its Recommendation after a Republican Member rebukes Bush’s Choice for U.N. Envoy. But confirmation is Likely”, *Los Angeles Times*, May 13, 2005.

²⁵ El 29 de julio de 2005, 36 senadores estadounidenses le habían escrito una carta al presidente Bush pidiéndole que no se valiera del recurso del nombramiento temporal. Los que suscribieron la carta argumentaron su preocupación sobre lo que consideraron una mentira, pues en la audiencia Bolton negó haber sido entrevistado por el inspector general del Departamento de Estado durante sus investigaciones sobre las fallas de los servicios de inteligencia en el caso de Irak. Importante asunto, dado que el propósito de dicha investigación era indagar la verdad sobre la acusación infundada que sostenía que Irak había intentado comprar uranio en Níger para su programa de armas nucleares.

representante de los Estados Unidos ante la ONU. Tal puesto, a su vez, le confiere un asiento directo en el Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos., y en consecuencia, la capacidad de influir en la conformación de la política exterior y de seguridad en general.

Este nombramiento temporal (*Recess Appointment*), el cual es posible aún a las prerrogativas presidenciales y que solo puede ejercerse hasta enero de 2007, le resta aún más credibilidad y legitimidad a la política de los Estados Unidos ante el organismo multilateral, sujeto a un trascendental debate filosófico, estructural y financiero como lo demostró la Cumbre del Milenio de septiembre de 2005. Al mismo tiempo, debilita la posición del embajador de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas, incapaz de obtener un mandato secundado por su Parlamento, en un claro traslado de las contradicciones en los mecanismos norteamericanos de toma y ejecución de las decisiones de política exterior a la palestra internacional.

La nominación temporal de Bolton durante el receso congresional sugiere, asimismo, que para el Presidente no es importante el futuro de la ONU. Para Bush, Bolton es precisamente la personalidad idónea que, a través de una ofensiva pública, defenderá e impulsará las políticas transformacionistas de su Administración ante la debilitada institución multilateral. Tampoco parece ser de significación para el Presidente, que la deteriorada imagen de los Estados Unidos en el extranjero mejore. Esto queda demostrado con la designación de un funcionario de segundo nivel como Embajador ante la ONU que se ha hecho famoso por sus bravuconadas, sus provocaciones y su unilateralismo. El poco aprecio de Bolton a la diplomacia internacional se demuestra en sus comentarios: “Las Naciones Unidas es una entidad inexistente”. Y en el infame “si el edificio del secretariado de Naciones Unidas perdiera 10 pisos, nadie notaría la diferencia”.²⁶

El plan de seguridad social y la reducción de los programas sociales

El principal tema en la conservadora agenda interna de Bush del primer semestre de su segundo período, tal como lo enunció en el discurso del Estado de la Unión del 2 de febrero de 2005, fue la privatización parcial del sistema de seguro social.²⁷ La razón básica de proponer esta reforma no consiste en una supuesta insolvencia como ha tratado infructuosamente de demostrar la Administración.²⁸ Esta radical

²⁶ Citado en Rosa Brooks, “Bolton's Broken World”, *Los Angeles Times*, June 13, 2005.

²⁷ President George W. Bush Delivers State Of The Union Address To The Nation The House Chamber of The Capitol, Washington, D.C. *Federal News Service, Inc.*, February 2, 2005.

²⁸ Según el presidente Bush, para el 2018 ese sistema empezaría a pagar más en beneficios de lo que recibe en impuestos. Los administradores del sistema de Seguro Social ofrecen pronósticos más optimistas y plantean que el auge económico de los Estados Unidos será de un promedio del 1,8 % durante el período entre el 2015 y el 2080, lo cual es alrededor de la mitad del ocurrido durante el siglo XX. Si el nivel de crecimiento aumenta a 2,5 % no habrá crisis de ningún tipo en el Seguro Social.

propuesta se explica por causas de carácter ideológico, en tanto el programa de seguridad social es uno de los pocos planes que ha sobrevivido el paulatino desmantelamiento del llamado Sistema de Bienestar Social norteamericano, basado en el New Deal de la etapa de Franklin D. Roosevelt.

Bush se propuso con una política ofensiva conservadora y tremendamente divisiva variar la esencia de este sistema de 70 años de existencia. El eje de la reforma consistió en la propuesta de crear “cuentas personales privadas” con una parte de los fondos descontados para el seguro social.²⁹

El debate sobre la solvencia a largo plazo de este programa se estancó por la oposición a las cuentas “extraídas” del seguro social³⁰ y al alto costo que su implementación tendría, el cual, según estimados de la Oficina Congressional de Presupuesto (Congressional Budget Office), podría llegar a los \$969 00 millones, si todos los elegibles participaban.³¹

La idea de variar el programa de seguridad social, según el plan de Bush, no caló positivamente en el ciudadano medio norteamericano. A pesar de haber organizado una gira de 60 días por 60 ciudades de la Unión en defensa de su prioridad doméstica, su popularidad ya había empezado a bajar para fines de abril, justo al cumplir los 100 días del segundo período.³² Para entonces, ya casi dos tercios de los estadounidenses (64%) desaprobaban el nuevo programa de seguro social, impulsado por la Administración.³³

El énfasis de Bush en la agenda doméstica, y particularmente en la reforma del seguro social, provocó la interpretación de que su proyecto en Irak había quedado sesgado y que el Presidente vivía en una perpetua negación sobre los acontecimientos que allí estaban teniendo lugar, por lo cual había optado por concentrarse en un tema de política interna que fortaleciera su legado conservador. En momentos en que se estaban desvaneciendo los prospectos de una amplia reforma del seguro social, el 22 de junio de 2005, los republicanos de la Cámara de Representantes propusieron un plan alternativo³⁴ para crear cuentas personales, que

²⁹ “Bush Cites Progress in Social Security Debate: President Says Troops Will Leave When Iraqis Fully Trained”, *Cable News Network* en CNN.COM, Wednesday, March 16, 2005.

³⁰ Los demócratas estaban mucho más inclinados a aceptar las cuentas privadas si estas hubiesen sido tratadas como adición al cheque tradicional de beneficios, en lugar de remplazarlos parcialmente.

³¹ “CBO Adds \$215 Billion To Estimated Cost Of Bush's Social Security Plan”, *CQ Today MIDDAY Update*, Congressional Quarterly and CQ Today, Tuesday, March 15, 2005.

³² Charlotte Raab, “Pierde lustre en los sondeos la imagen del Presidente”; *Nuevo Herald*; Friday, April 29, 2005, Sección: La Nación, p. A04.

³³ “Public Sends Mixed Messages on Social Security Reform”;

<http://www.gallup.com/nl/?15538,AlertPE,4/6/2005>; *Gallup Poll News Service*: “Bush Job Approval at 50%”; <http://www.gallup.com/nl/?15775,AlertPE,4/12/2005>.

³⁴ El plan proponía la utilización del superávit del Seguro Social para financiar cuentas privadas de inversiones, mientras el sistema reciba más por concepto de impuestos que lo que paga en beneficios. No se propuso nada que solucionase las llamadas dificultades de liquidez a largo plazo del seguro social.

si bien no llegaba a cumplir con las grandes cuentas de ahorro que deseaba el Presidente, mantuvo el tema en el debate. Finalmente, el asunto sucumbe como resultado del huracán Katrina.

El meteoro vino a obstaculizar aún más la estancada y controversial reforma del seguro social. Con una enorme deuda pública como colofón, la necesidad de tomar en consideración el costo de las tareas de recuperación del Sur, para decidir un presupuesto que contrarreste los gastos, complicó la aplicación de este oneroso y priorizado programa. Además, el siniestro destapó irrefutables contradicciones sociales sobre todo en las áreas de raza y clase, lo cual desde el punto de vista psicológico y sociológico limitó la discusión sobre una propuesta que toca un sensible aspecto para el ciudadano medio norteamericano: la calidad de vida en la vejez.

Incluso antes del huracán, muchos norteamericanos estaban preocupados por los cambios en su jubilación, los cuales podrían derivar en una reducción de sus beneficios o en un aumento de los impuestos a sus salarios. Con todo, entonces, los demócratas no fueron capaces de articular una propuesta diferente, reduciendo su oposición a la mera crítica.

La exposición de los niveles de pobreza en el país más poderoso del planeta, a raíz del desastre en Nueva Orleans, pudiera ser un momento histórico que propicie la cristalización de ideas significativas y movimientos alternativos dentro del desmoralizado partido demócrata, devorado por su propio acercamiento ideológico a las concepciones conservadoras. Como mínimo, y aunque sea solo por intereses mezquinos de oportunismo político, Katrina le sirve en bandeja de plata al partido de la minoría la posibilidad de cuestionar el liderazgo de un Presidente, cuya mayor carta de triunfo en las elecciones de 2004 fue la protección del país.

El régimen político norteamericano, y particularmente, los demócratas, más allá de la convergencia político-ideológica, necesitan de la alternancia en el poder para corregir excesos o intereses que devengan en políticas contraproducentes, que pongan en peligro al sistema mismo. El momento político poskatrina le brinda a los demócratas la ocasión de hacer énfasis en la necesidad de preservar determinados programas sociales y envolverse en una bandera de “apariencia más misericordiosa” ante las clases más empobrecidas de Norteamérica, que le permita pasar a la ofensiva en el debate público y cercenar el proyecto en extremo conservador de la Administración Bush.

Según la propuesta congresional, el dinero sería administrado por el gobierno y se invertiría en bonos del Tesoro hasta el 2009. Luego una junta recomendaría una lista de otras opciones de inversión, que las personas podrían escoger, y el dinero en las cuentas podría ser recibido por los herederos. Véase Jackie Calmes, “Bush Pushes Action On Social Security. Bennett, DeMint Are Asked to Move Forward With Their Conflicting Proposals”, *The Wall Street Journal*, June 22, 2005; p A4.

En cuanto a la reducción de los costos sociales, en la propuesta presupuestaria presidencial para el año fiscal 2006 se planeó prescindir o restringir 154 programas, que el gobierno consideraba un fracaso, ineficientes o que duplicaban otros servicios. En la proposición, se descartaron \$4, 300 millones de los programas educacionales,³⁵ \$1 000 millones de los programas de salud y \$1 500 millones de programas para el mantenimiento de la ley.³⁶ Las reducciones incluyeron la eliminación de \$2 500 millones de los programas de subsidios agrícolas, \$470 millones de los programas de vivienda, la disminución del gasto público en el Medicaid,³⁷ las becas estudiantiles, los desembolsos para los militares retirados, la asistencia de bienestar social y el seguro de desempleo.³⁸

De otro lado, después de Katrina, también la propuesta de la reforma del Código Impositivo ha quedado detenida, así como la proposición republicana de mayores recortes de impuestos. Esto puede servir de fundamento para un plan demócrata más cohesionado, que brinde la posibilidad de concertar acciones, dirigidas a cambiar el debate en función de los comicios congresionales de 2006. Para las víctimas de Katrina, los demócratas han propuesto expandir el Medicaid, realizar exenciones fiscales para alentar la reconstrucción y el mantenimiento de los negocios, suministrar más dinero para las viviendas, expandir la cobertura médica, dar \$2 500 a los distritos escolares por cada alumno evacuado que matricule y suspender o ponerle fin a toda una serie de penalidades por no pagar préstamos estudiantiles u otras obligaciones financieras.

Tomando en cuenta el endeudamiento público del país y los elevados gastos de defensa, estas ideas vuelven a situar el dilema de cómo se sufragará este llamado Plan Marshall para los estados afectados del Golfo de México, según fue denominado por la Líder de la Minoría de la Cámara de Representantes, Nancy

³⁵ En el caso de la educación, el Ejecutivo diseñó la reducción de la asignación de dinero a la educación en aproximadamente un uno por ciento, limitando los fondos hasta unos \$56 000 millones. Esto significa que uno de cada tres de los programas eliminados en las propuestas presupuestarias de 2006 pertenecían al área de la educación. Véase Bill Swindell, “Lawmakers Cool to Bush-Backed Expansion of No Child Left Behind Act Members of Both Parties Seek Smaller Changes that Could Help Their States, Such as Relaxing Rules for Veteran Teachers, *CQToday*, Tuesday, March 1, 2005, p 4.

³⁶ Andrew Taylor, “Bold Agenda Presents Opportunities, Risks for GOP. On the Sidelines for Now, Congressional Republicans Soon to Step into Vortex”, *CQToday*, Tuesday, Thursday, February 3, 2005, p. 1.

³⁷ John Reichard, “Governors Unlikely to Settle on Medicaid Overhaul Plan Before Leaving Town. Congress Soon to Begin Debating Cuts to Entitlement Program; State Officials Struggle for a Strategy to Respond”, *CQToday*, Tuesday, March 1, 2005, p. 3. El 28 de abril de 2005, la Cámara de Representantes aprobó por estrecho margen (214-211) un proyecto de presupuesto por \$2,6 billones que reduce el Medicaid, programa de salud para los pobres, por primera vez desde 1997. El plan prevé \$10 000 millones en reducciones al Medicaid en los próximos cinco años.

³⁸ Véase “Bush Budget Will Touch Off Entitlement Spending Battle”, *CQ Today Midday Update*, Congressional Quarterly and CQ Today, Friday, February 4, 2005. Labor Research Association: “Bush Budget: All Guns, No Butter”, Feb. 15, 2005. <http://www.laborresearch.org/story2.php/375>.

Pelosi, secundada por el líder de los demócratas en el Senado, Harry Reid. Los gastos de Katrina exceden los \$62 000 millones de dólares y posiblemente lleguen a los \$200, 000 millones o más.

Tanto los republicanos en el Congreso como la Administración han insistido en mayores restricciones presupuestarias para financiar la recuperación por los daños causados por Katrina. La fórmula de que los recortes en el área social y la congelación de impuestos estimulan la producción y la economía es un artículo de fe de los republicanos-conservadores.³⁹ En otras palabras, fiel “al libre mercado”, la filosofía conservadora insiste en reducir los servicios estatales federales al mínimo y obligar a los ciudadanos a recurrir al sector privado para cubrir sus necesidades, lo cual, en la práctica, no ofrece los resultados que vaticinan sus promotores.

Enmarcado en la creencia del federalismo dual, y como parte de su conservador legado político, durante la presidencia de Bush se han trasladado los desafíos de sufragar los servicios públicos esenciales a los gobiernos estatales y locales. Los recortes y congelación de impuestos federales han implicado aumentos en los desembolsos que tienen que hacer esas instituciones estatales, condales y municipales. La resultante es que estos últimos han tenido que asumir obligaciones financieras cada vez mayores para las que no estaban preparados, y, subsiguientemente, ha provocado una mayor afectación a los sectores más pobres y desposeídos de la sociedad norteamericana. Esto quedó demostrado en los tres estados que fueron azotados por el huracán Katrina, el cual a su vez también puso de relieve las grandes desigualdades clasistas y raciales de la sociedad norteamericana, la cual tiende a negar sus nichos de pobreza extrema.

La fuerza militar y su variable tecnológica: Instrumento medular del poderío nacional norteamericano

A pesar de la carga fiscal de aproximadamente \$427, 000 millones o el 3,5% del Producto Interno Bruto (PIB), la Administración republicana indicó para el año fiscal 2006 un aumento de los gastos militares de un 4,8%, mientras que los vinculados a la seguridad nacional lo harían en un 2,3%.⁴⁰ En total, los gastos relacionados con los llamados programas de seguridad nacional, enmarcados en un concepto estrecho y, sobre todo, dependiente de las llamadas posibles amenazas asimétricas de tipo belicista proveniente del exterior, crecieron en \$843, 000 millones para el año fiscal 2006.⁴¹

³⁹ Esto se ha dado a conocer bajo el nombre de una “Nueva Sociedad de Propietarios”.

⁴⁰ Jonathan Allen, “War Spending Bill Too Big for Some Republicans. Lawmakers Question Numerous ‘Emergency’ Expenditures in Bill for Military”; *CQToday*, Thursday, February 17, 2005.

⁴¹ Antes de Katrina, se habían solicitado un presupuesto de 34 500 millones de dólares para el Departamento de Seguridad Interna, \$1 600 millones para combatir las amenazas químicas y biológicas y \$9 900 millones para los próximos cinco años.

En el caso de la Defensa, y demostrando que el elemento de la fuerza, y en particular de la fuerza militar y su variable tecnológica como instrumento medular de la proyección internacional del poderío nacional norteamericano constituye el arma de poder más notable en la política exterior y de seguridad de la Administración de George W. Bush, quien solicitó al Congreso \$419, 300 millones para el Pentágono (HR 1815) y recibió \$440, 200 millones como parte del proyecto de ley de fondos discrecionales (HR 2863) aprobado por el Legislativo.

Entre otros objetivos, sobresalen la intención de reforzar y reformar al ejército, así como la creación de nuevas unidades de combate y apoyo de la infantería de marina en función de la llamada “lucha global contra el terrorismo”.⁴² En esta partida presupuestaria se incluyen \$50, 100 millones de fondos adicionales para las guerras en Irak y Afganistán para la primera etapa del año fiscal 2006. El aumento en los gastos de Defensa indica la asignación de \$40, 100 millones más que los \$400, 100 millones del año Fiscal 2005.⁴³ El programa de Bush prevé un aumento gradual del presupuesto militar hasta alcanzar los \$502 300 millones en el 2011, lo cual subraya la convicción de que no hay por ahora un plan previsto para la evacuación de Afganistán o de Irak.⁴⁴

En este contexto, el debate se puede enrarecer en cuanto a la necesidad de diseñar una estrategia a mediano plazo que contemple la retirada de las tropas de Irak.⁴⁵ En otro orden de cosas, pudiera ampliarse la polémica sobre el papel de los militares en el contexto de profundización de la reforma de inteligencia, dirigida por el nuevo Director Nacional de Inteligencia John Negroponte⁴⁶ (2004 Intelligence Overhaul Law-PL 108-458). Este asunto ha tomado relevancia particular a raíz de las controversiales conclusiones de la Comisión Presidencial sobre las Armas de Destrucción Masiva en Irak y su conclusión sobre el sistémico desacierto de la

⁴² En el proyecto se plantea “la necesidad de fuerzas conjuntas flexibles y adaptables, unidades fuertes para operaciones especiales, logística altamente eficiente y la mejor capacidad posible en materia de inteligencia y comunicaciones”.

⁴³ John M. Donnelly, “The State Of The Union: Defense. Bush Pledges ‘Firm’ Irak Commitment as Lawmakers Question Size of Military”; *CQToday*, Thursday, February 3, 2005, p. 4.

⁴⁴ Susan Crabtree And John M. Donnelly, “Procurement Funds Must Hit \$100 Billion to Sustain Military, Hunter Says”; *CQToday*, Monday, January 31, 2005, p. 9.

⁴⁵ Una encuesta Gallup de junio de 2005 arrojó que una clara mayoría del pueblo de los Estados Unidos (59 %), favorece una retirada parcial o total de las tropas en Irak. El 16 de junio de 2005, 41 miembros demócratas de la Cámara de Representantes formaron un concilio político llamado “Fuera de Irak” y cuatro legisladores, dos republicanos (Walter Jones, por Carolina del Norte y Ron Paul, por Texas) y dos demócratas (Dennis Kucinich, por Ohio, y Neil Abercrombie, por Hawái), introdujeron una resolución que pedía una retirada a partir de octubre de 2006, la cual si bien no especifica un punto final para una salida completa, difiere de la línea política de Bush. La resolución tiene pocas posibilidades de aprobarse en el Congreso, debido a su mayoría republicana.

⁴⁶ El Senado confirmó el 21 de abril de 2005 a John Negroponte como primer Director Nacional de Inteligencia (DNI) del país con una votación de 98 a favor y dos en contra, y ese mismo día juró en el cargo.

comunidad de inteligencia, y en particular de los militares, respecto a la presunción de que en Irak existía ese tipo de armas.⁴⁷

De otro lado, Katrina ha potenciado el cuestionamiento creciente a la guerra en Irak y al monto de los fondos gastados por el gobierno en esa cruel conflagración en función de su unilateral aspiración global de dominación. Desde los ataques del 11 de septiembre de 2001, el Congreso ha suministrado al Presidente \$350, 000 millones de dólares⁴⁸ para tareas de combate y “reconstrucción” en Irak y en Afganistán, bajo la falacia de combatir el terrorismo en el ámbito mundial. Ahora, los legisladores se encuentran en la encrucijada de justificar más asignación de dinero para las guerras imperiales preventivas de Bush, aun cuando ha aumentado la preocupación por parte del ciudadano medio norteamericano acerca de cómo sufragar la reconstrucción de la costa del golfo de México, tras Katrina y, en menor medida, del paso del meteoro Rita. Acorde con un sondeo realizado el 21 de septiembre de 2005 para la *Associated Press* por la empresa internacional *Ipsos* se indicaba que un 42% de los encuestados prefería la reducción de gastos en la guerra de Irak como la mejor opción para financiar la recuperación en el sur.⁴⁹

Al mismo tiempo, uno de los temas que fuera importante puntal electoral de Bush: El manejo de la guerra en Irak se ha deteriorado de manera ostensible. Según encuesta de Gallup, para finales de septiembre de 2005, más de las dos terceras partes de los entrevistados (67%) consideraban que el Presidente había efectuado una labor desacertada en cuanto a la dirección de la guerra, tres de cada cinco valoraban el envío de las fuerzas militares a ese país como una decisión equivocada, mientras que las dos terceras partes abogaban por un retiro inmediato de las tropas.⁵⁰ La pérdida de confianza en Bush como Presidente de un país en guerra es obvia, como también el desgaste del público en cuanto a permitirle seguir monopolizando el patriotismo, resurgido después del 11 de septiembre de 2001, en función de sus ideológicas e ideologizantes políticas, tanto domésticas como internacionales.⁵¹

⁴⁷ El informe de la Comisión que fuese presidido por el ex senador Charles S. Robb (D-Va.) y el retirado juez de apelaciones Laurence H. Silberman apuntó hacia tres instituciones que consideró particularmente equivocados a la hora de llegar a la conclusión de que en Irak existían Armas de Destrucción masiva: The Army's National Ground Intelligence Center (NGIC), el Defense Humint Service (DHS) del Pentágono y el Weapons Intelligence, Nonproliferation and Arms Control Center (WINPAC) de la CIA.

⁴⁸ El total incluye los \$82 000 millones que los legisladores aprobaron en mayo de 2005.

⁴⁹ Will Lester, “Katrina aumenta dudas sobre Bush, ya afectado por Irak”, *Associated Press*, 9/21/2005.

⁵⁰: “Support for U.S. Policy in Iraq Is Dwindling”, *Gallup News Service*, <http://www.gallup.com/nl/?18718,AlertPE,9/21/2005>.

⁵¹ Cindy Sheehan, madre de Casey, soldado de California que murió en Irak el 4 de abril de 2004, sobre todo después de su acampada en las afueras del rancho de Bush en Crawford durante el mes de agosto de 2005, ha devenido en un factor importante en avivar el movimiento antibelicista de los Estados Unidos, y en atraer a la opinión pública nacional a su posición contra la guerra.

A estas variables se une la interrogante sobre la permanencia de Donald Rumsfeld como Secretario de Defensa hasta el final del segundo período de Bush y la posibilidad de que resulte el “chivo expiatorio único”, y consecuentemente, cargue con toda la responsabilidad del “desastre Iraquí”, el asunto de las torturas y los tratos irrespetuosos a los presos musulmanes, como máxima figura en la cadena de mando militar.

Con anterioridad al azote de Katrina, la renovación de las 16 cláusulas⁵² de la llamada Ley Patriótica (PL. 107-56) que expiraban para finales de 2005,⁵³ y la posibilidad de que esta norma fuese enmendada ya sea para expandir las posibilidades extrajudiciales de interferencia gubernamental en la vida privada norteamericana o para limitar tales quebrantos de los derechos civiles hubiese sido clave para medir las contradicciones entre la Administración y los demócratas en el Congreso, e incluso entre los republicanos, preocupados por el alcance de la misma.⁵⁴ Pero en el contexto de los atentados terroristas en Londres del 7 de julio de 2005, y la manipulación del miedo como instrumento político, ambas cámaras congresionales decidieron ratificar las cláusulas provisionales⁵⁵ con amplio apoyo bipartidista y retomar las banderas de la cruzada antiterrorista. La ampliación de la denominada “Ley Patriótica” terminó con un balance favorable para la posición del Ejecutivo.⁵⁶

⁵² Entre las cláusulas más controversiales sujetas a renovación se encontraban la sección 213 que permite a un agente del gobierno entrar a un lugar sin que se notifique previamente al dueño, la sección 802 que define de forma muy amplia los conceptos de terrorismo y terrorista y la sección 215 que autoriza que los agentes del gobierno obtengan, sin previa autorización de un juez, los récord de negocios y bibliotecarios de los ciudadanos y residentes en los Estados Unidos, y faculta, además, a las autoridades a acceder a datos archivados en librerías y videotecas, para conocer los hábitos de lectura de las personas. Véase Richard B. Schmitt, “Patriot Act Is Called Vital”, *Los Angeles Times*, April 6, 2005; Eric Lichtblau, “Antiterrorism Law Defended as Hearings Start”, *The New York Times*, Wednesday, April 6, 2005, Section: National Report, p. A13.

⁵³ La mayor parte de la ley tiene carácter permanente, pero 16 cláusulas deberían caducar en diciembre de 2005 a menos que fuesen renovadas por el Congreso, tal cual ocurrió.

⁵⁴ El republicano Larry Craig y el demócrata Dick Durbin introdujeron un proyecto de legislación destinado a limitar cláusulas importantes de la ley, que consideraban excesivas, pero no prosperó.

⁵⁵ El debate en el pleno de la Cámara Baja que tuvo lugar a la sombra de los atentados terroristas en Londres del 7 de julio de 2005 se movió hacia la prórroga de forma permanente de catorce de las 16 cláusulas temporales e impuso un plazo de diez años para la vigencia de las dos relacionadas con el manejo de archivos financieros y la vigilancia electrónica. Por su lado, el Senado aprobó la prórroga de la ley y decidió, al igual que la Cámara de Representantes, hacer permanentes catorce de las 16 cláusulas. Véase “London Transit Attacks Could Alter Senate Homeland Security Funding Priorities”, *Congressional Quarterly*, CQ Today Midday Update, July 7, 2005.

⁵⁶ La medida se amplió, y aunque trata de imponer nuevos requisitos para que el Gobierno de los Estados Unidos informe de forma periódica al Congreso sobre el escrutinio que realiza de los archivos confidenciales de los estadounidenses, como los expedientes médicos, los archivos financieros o las tarjetas bibliotecarias, la esencia extrajudicial de interferencia gubernamental en la vida privada norteamericana se mantuvo. Véase “El Congreso prorroga la ley antiterrorista”, *El Nuevo Herald*, EFE, Friday, July 22, 2005, Sección: La Nación, p. A14.

Nombramientos a las Cortes Federales de Justicia

Precisamente, en el primer cuatrimestre de 2005 los nombramientos a las cortes federales intermedias de justicia constituyeron el asunto de mayor fricción entre el Ejecutivo y los líderes republicanos del Senado, de un lado, y la minoría demócrata, de otro. La disputa destacó en parte la lucha de poder entre republicanos y demócratas alrededor de las nominaciones de jueces en el ámbito federal. Durante el primer período de la Administración Bush, el partido demócrata, en minoría desde el 2002, había logrado detener la aprobación en el pleno del Senado de postulaciones ejecutivas a la rama judicial que se caracterizaban por ser extremadamente conservadoras.

Al inicio de esta segunda etapa, el Presidente insistió en nominar a jueces de esa línea política. Los demócratas, por su lado, decidieron intentar controlar el proceso de selección de los funcionarios judiciales a través de una maniobra regular dilatoria partidista, conocida bajo el nombre de filibusterismo. Esta regla de la Cámara Alta consiste en alargar la discusión hasta el absurdo como vía para pasar a otros aspectos de la agenda y congelar, así, la posibilidad de un voto en el pleno. Una vez en práctica, se necesitan 60 votos de los 100 senadores para poner fin a ese procedimiento. Empero y antes del inicio del debate del tema en cuestión, los reglamentos de la Cámara Alta pueden ser alterados con una simple mayoría de 51 votos. Precisamente, este era el cambio buscado por los republicanos, el cual recibió el nombre de opción nuclear. Esto hubiese dado al traste a una tradición parlamentaria de larga data en el Senado, y, en consecuencia, a una ruptura de las reglas que hubiesen puesto en peligro la posibilidad de establecer un consenso bipartidista en otras áreas prioritarias de la política.

Para evitar un conflicto estéril, el 23 de mayo de 2005, un grupo de 14 senadores⁵⁷ moderados, liderados por John McCain, siete republicanos y siete demócratas, alcanzó un acuerdo que allanó el camino para la ratificación de muchos nominados a jueces, propuestos por Bush.

Si bien algunos analistas valoraron el trato como un ejemplo de que el centro político aún puede dominar el actual acontecer público norteamericano, a nuestro entender, en última instancia el compromiso constituyó un triunfo del conservadurismo. A través del mismo se logró que jueces de extrema derecha fuesen ratificados por la mayoría republicana senatorial.⁵⁸ Provisoriamente, el

⁵⁷ Los republicanos fueron: John McCain (Ariz.), John Warner (Va.), Mike DeWine (Ohio), Susan Collins (Maine), Lincoln Chafee (R.I.), Olympia Snowe (Maine) y Lindsey Graham (S.C.). Los demócratas: Ben Nelson (Neb.), Mark Pryor (Ark.), Robert Byrd (W.Va.), Mary Landrieu (La.), Ken Salazar (Colo.), Dan Inouye (Hawái) y Joe Lieberman (Conn).

⁵⁸ Ejemplo son las ratificaciones de los nominados: la afroamericana Janice Rogers Brown, Priscilla Owen, William Pryor, David McKeague, Thomas B. Griffith, Terrence W. Boyle II y Richard Griffin. Otros nominados conservadores a las cortes de apelaciones son: Henry Saad, William Myers, William

acuerdo también previno la utilización de la llamada opción nuclear, la cual habría eliminado la posibilidad por parte de los demócratas de utilizar el filibusterismo como maniobra dilatoria para bloquear nominaciones polémicas por parte del Ejecutivo.⁵⁹

La victoria conservadora en este asunto se reforzó por lo que entonces era una probabilidad que devino en realidad objetiva cuando el 1 de julio de 2005 la primera magistrada mujer de la Corte Suprema de los Estados Unidos, Sandra Day O'Connor, dispuso retirarse.⁶⁰ Escasamente a dos meses de la decisión de la jueza, William Rehnquist, Presidente del máximo tribunal de justicia de los Estados Unidos, falleció el 4 de septiembre.⁶¹ Tales circunstancias le permitieron al Presidente George W. Bush la posibilidad de designar al menos a dos jueces a la vitalicia Corte Suprema, incluido al jefe de la misma.⁶²

Las modificaciones que están teniendo lugar en la composición del Tribunal Supremo provocarán una drástica variación ideológica hacia la derecha con gran impacto de sus fallos en áreas sociales y sobre el papel del gobierno. El accionar del máximo tribunal hasta finales de junio de 2005 se había caracterizado por votaciones precariamente divididas de cinco a cuatro sobre temas centrales del actual debate social en Norteamérica.

No se debe olvidar que los padres fundadores delinearon la Ley Suprema de los Estados Unidos de manera tal que los magistrados federales al no ser electos, ni estar sujetos a períodos breves de estancia en las cortes, pueden convertirse, a través de la jurisprudencia, en las salvaguardas del sistema político, cuando en este existan crisis o fracturas, que puedan poner en peligro las bases mismas del régimen socioeconómico.

El nombramiento por parte del presidente Bush de dos magistrados a la cima del sistema judicial norteamericano, sumado a la designación de un gran número de jueces a las cortes federales intermedias perpetúa la tendencia conservadora en esta

Haynes y Brett Kavanaugh, el cual fue sacado de la agenda de debate del Comité Judicial el 16 de junio de 2005.

⁵⁹ Paul Kane and Mark Preston, "Deal Averts Showdown", *Roll Call*; May 24, 2005, "Text of Senate Compromise on Nominations of Judges", *The New York Times*, May 24, 2005, David Rogers, "Compromise Brightens Prospects For Bolton and Some Senate Bills"; *The Wall Street Journal*, May 25, 2005; p. A4; Ronald Brownstein and Janet Hook, "Senate Truce Faces Test of Bush's Next Nominations. A Polarizing Choice, Especially for Supreme Court, Could Unravel the Deal, Both Sides Say."; *Los Angeles Times*, May 25, 2005; Robert Kuttner, "Bush and Frist Got What They Wanted", *The Boston Globe*, May 25, 2005; Dan Balz, "For GOP, Deeper Fissures and a Looming Power Struggle"; *The Washington Post*, Wednesday, May 25, 2005; p.A1.

⁶⁰ Linda Greenhouse, "O'Connor Held Balance of Power"; *New York Times*, July 2, 2005.

⁶¹ Jesse J. Holland, "La muerte de Rehnquist desata batalla por el Supremo"; *El Nuevo Herald*, September 5, 2005, p. A01.

⁶² La muerte de William Renhquist que padecía de cáncer de tiroides era algo esperado. Antes de su muerte se hablaba de la posibilidad de que fuese remplazado por designación de George W. Bush por el juez Antonin Scalia. Sin embargo, por razones de coyuntura política Bush decidió de manera diferente.

vitalicia rama de gobierno. Al mismo tiempo, en la política práctica, le otorga cartas de triunfo a la derecha cristiana fundamentalista y a su conservadora empresa ideológico-cultural con repercusiones políticas significativas.

La custodia de los llamados valores morales a través de las cortes constituye uno de los objetivos centrales de la facción fundamentalista religiosa del partido republicano, que expresa una preocupación creciente sobre la relajación de las virtudes sociales y familiares norteamericanas, partiendo de una cultura en donde —más allá de la afiliación religiosa— los principios del puritanismo protestante imperan en el orden social.

El llamado a “defender” los principios éticos, que consideran en franco deterioro, se entrelaza con la cruzada ideológica a favor del patriotismo y el “destino manifiesto” de los Estados Unidos de América, propuesto por la más elitista corriente neoconservadora. El debate social —de una rancia ética fundamentalista que habla por boca de los evangélicos conservadores en un sistemático accionar a través de las instituciones religiosas de base e incluso organizaciones comunitarias— se fuerza ahora en las cortes. En ellas se emitirán definiciones legales respecto a temas relacionados con la moralidad, la relación del individuo con dios y la fe, la familia, la integridad, el asunto de la teoría de la evolución, el argumento de los matrimonios homosexuales, los límites a la investigación pública con células madres, el aborto, el rezo en las escuelas públicas, la tenencia de las armas de fuego, y la intervención del estado en la vida personal, y en la correlación vida-muerte, aspecto relevante para un sector de la sociedad americana como quedó demostrado en el caso de Terri Schiavo.

Ante la vacante dejada por Sandra Day O'Connor en la Corte Suprema, el Presidente Bush nombró al juez conservador, pero no estridente, y con fuertes credenciales académicas y legales John G. Roberts de 50 años.⁶³

En una jugada política que llevaría a matar dos pájaros con un solo tiro, al fallecer William H. Rehnquist en septiembre, Bush decidió nominar a este novato no solo como el 17 magistrado, sino también como Presidente de la Corte Suprema. Así, evitaba que el proceso de nominación se convirtiese en una exposición negativa de

⁶³ Roberts fungió como asesor del partido republicano en la trifulca jurídica que desató el estado de la Florida en las irregulares elecciones presidenciales de 2000, y que finalmente llevaría el caso a la Corte Suprema, la cual por decisión de 5 a 4 decidió que George Herbert Walker Bush deviniera en el 43er Presidente de los Estados Unidos de América. Roberts, después de terminar su carrera de leyes en la Universidad de Harvard, trabajó como ayudante del difunto William H. Rehnquist, presidente de la Suprema Corte de Justicia, quien fuese uno de los propulsores acérrimos de la inconstitucionalidad de Roe V. Wade. Asimismo, Roberts se distinguió como consejero jurídico de la Casa Blanca durante el gobierno de Ronald Reagan (1982-86) y de George Bush, padre (1989-93). Años más tarde, estuvo bajo las órdenes de Kenneth W. Starr, jefe del equipo que procedió legalmente contra el ex presidente Bill Clinton en el caso Whitewater y buscó su abdicación presidencial por sus relaciones amorosas con Monica Lewinsky. Roberts es miembro de la Sociedad Federalista, organización de abogados y jueces conservadores que tiene gran influencia en materia judicial en el gobierno de Bush.

su dañada imagen a la sombra de Katrina. De esta forma, aseguró un rápido voto favorable, sin repercusiones políticas adversas para su inmovilizado proyecto, mientras ganaba tiempo para nominar a la también acérrima derechista Harriet Miers como el segundo remplazo al Máximo Tribunal de Justicia.⁶⁴

Roberts resultó una persona difícil de desentrañar para infortunio del Partido Demócrata. Los escasos dos años que permaneció en la Corte Federal de Apelaciones del Distrito de Columbia no sirvieron para demostrar que su adhesión a una tendencia ideológica concreta ponía en tela de juicio su nominación y su imparcialidad ante la ley. A diferencia de candidatos que lo precedieron (Clarence Thomas o Robert H. Bork), Roberts en raras ocasiones o tal vez nunca, ni siquiera durante las audiencias para su confirmación en el Senado, se prestó a la polémica. Por el contrario, se destacó más por ampararse en el bufete y dentro de su aposento jurídico en Washington. No obstante, John G. Roberts dictaminó en contra de brindar a los presos en la base de Guantánamo la protección de las Convenciones Internacionales de Ginebra contra el trato inhumano y la detención prolongada sin juicio. Dictó a favor de mantener en secreto los archivos de la comisión sobre energía del vicepresidente Dick Cheney, que elaboró controvertidos proyectos de ley energéticos con la participación del sector privado, el cual resultó favorecido.

Aún más reciente, y ya en la mira pública, el 15 de julio de 2005, Roberts votó como parte de un panel de jueces federales a favor del veredicto unánime de permitir el funcionamiento de los tribunales militares de Bush para la guerra antiterrorista, allanando el camino para que el Pentágono reanude los juicios de los detenidos en Guantánamo.⁶⁵

El recorrido de Roberts como juez de la corte federal de apelaciones fue breve, cauteloso y previsor respecto a la evasión de la controversia pública, pero cristalinamente conservador. Las características de Roberts y su trayectoria política⁶⁶ y jurídica, por dudosas que puedan parecer, al mismo tiempo se convirtieron en el punto de fortaleza de su candidatura, ratificada por el Senado el 29 de septiembre de 2005 por votación de 78 a favor y 22 en contra.⁶⁷ La confirmación del juez conservador Roberts implica su participación en decisiones

⁶⁴ El 3 de octubre de 2005, Bush nombró a su asesora legal de la Casa Blanca Harriet Miers para remplazar a Sandra Day O'Connor. Miers es miembro del círculo más íntimo del Presidente, y nunca ha sido jueza. Como abogada, fue la primera mujer presidente del colegio de abogados de la ciudad de Dallas y luego del estado de Texas.

⁶⁵ “Las protecciones de las Convenciones de Ginebra de 1949 no rigen para al-Qaida y sus miembros, de manera que un ex chofer de Osama bin Laden no puede recurrir a ellas”, sostuvo el juez A. Raymond Randolph en opinión a la que se adhirió Roberts. Véase Henry Weinstein, “Debating the Power of the Presidency. Some Say John Roberts' Biggest Impact on the High Court Could Come in Cases on Wartime Executive Authority —Not a Right to Abortion”, *The Nation*, August 14, 2005.

⁶⁶ *Ibid*

⁶⁷ “Roberts To Be Sworn In This Afternoon Following 78-22 Senate Confirmation”, *CQ Today MIDDAY Update*, Congressional Quarterly, September 29, 2005.

trascendentales en todas las esferas de la vida social norteamericana en al menos los subsiguientes 30 años y es una carta a favor de las posiciones más derechistas de la sociedad norteamericana.

Repercusión de Katrina

El hecho de que el poder de los Estados Unidos sea la expresión de un militarismo enraizado en un Estado autocrático es también evidencia de la crisis latente que hoy estremece su política interna e internacional, lo cual llega a su clímax ante la anémica respuesta y limitado socorro por parte del gobierno federal a las víctimas del Huracán Katrina⁶⁸ en los estados de la Louisiana, Mississippi y Alabama.

Esto fue el resultado inevitable de medidas federales con énfasis en la protección contra ataques terroristas internacionales a expensas de la preparación contra desastres naturales, que en su esencia restringía el concepto de seguridad a golpes terroristas, sobre todo provenientes del exterior.⁶⁹ La Agencia Federal de Administración de Emergencias (FEMA), que en su momento fue una poderosa agencia independiente centrada en responder a terremotos, inundaciones, huracanes y otros desastres naturales fue colocada bajo la égida del gigantesco Departamento de Seguridad Interna luego de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001. A esta lógica antiterrorista se subordinó su función central y, en consecuencia, Nueva Orleans pagó el precio del proyecto político del gobierno de Bush y su nepotismo, personificado en Michael Brown, hasta entonces Director de la FEMA.⁷⁰

Katrina puso al relieve que los cambios estructurales y el aumento del gasto en términos de seguridad ha sido un fracaso del diseño de la Administración Bush. Resaltó, paralelamente, la imprevisión, la torpeza y la falta de interés con que se ha desempeñado el gobierno federal de los Estados Unidos, primero ante las perspectivas de un posible desastre natural y después frente a la evidencia de una catástrofe humana casi sin parangón en la historia de ese país con miles de muertos en la región sureña.

⁶⁸ Katrina golpeó el sur de la Florida, particularmente a los condados de Miami-Dade/Broward el 25 de agosto como huracán de categoría 1. En la mañana del 29 de agosto de 2005, Katrina ya con categoría 4 golpea el sur del estado de Louisiana y la zona de la frontera con Mississippi.

⁶⁹ El concepto de “seguridad” es mucho más amplio que las áreas tradicionales basadas en argumentos bélicos y de altos vuelos estratégicos.

⁷⁰ Antes de presidir FEMA, Brown dirigía la Asociación Internacional de Caballos de Raza Árabe, de la cual fue obligado a dimitir. Después se supo que Brown había inflado su currículum como experto en desastres y erudito en ética del derecho. Fue recomendado al cargo por el director saliente de la agencia, Joe Allbaugh, quien fue jefe de personal de Bush en Texas y uno de los artífices de su campaña en el 2000. Allbaugh está registrado como cabildero de Halliburton, la transnacional de ingeniería y servicios que presidió el vicepresidente Dick Cheney, y de la cual todavía devenga beneficios. Una unidad de ese conglomerado, Kellogg Brown and Root, ha obtenido la mayor tajada de los contratos tanto en Irak como en el área de desastre de los huracanes Katrina y Rita, a desdén de los habituales mecanismos de licitación.

La repercusión de Katrina en términos políticos parte de poner en dudas al propio sistema norteamericano. Este, que trata de establecerse como paradigma para el mundo, manifestó su incapacidad para proteger a sus ciudadanos, y aún más importante de responder con prontitud para salvar, ante todo, vidas humanas. Se pusieron al descubierto de manera descarnada las diferencias clasistas y raciales del país en una región de gran trascendencia política y electoral como es el Sur.

El alcance de la demora de más de cinco días ante la emergencia de desproporcionadas dimensiones en la histórica ciudad de Nueva Orleans y el acento militarista que al inicio tuvo la reacción tardía, con mayor énfasis en la “restauración del orden público”⁷¹ que en la prioridad de los aspectos humanitarios para la evacuación de una población aterrorizada y sin recursos alimenticios y médicos es un boomerang. Esto, unido a los factores económicos, pudiese, potencialmente, conducir a un punto de inflexión del realineamiento político a favor del partido republicano que la región del Sur le otorgó ya hace más de 25 años. Sin embargo, las variables clase y raza son imprescindibles a considerar en el análisis, pues los sectores más golpeados por la inacción gubernamental fueron precisamente los afroamericanos más pobres, cuyo patrón de votación en esta región se distingue por un considerable abstencionismo.

Bush no puede aspirar al cargo de nuevo, pero cualquier erosión del respaldo público podría sellar su posición de presidente inhábil, dañar a su partido en las próximas elecciones congresionales e incluso a las presidenciales de 2008. Los efectos de Katrina erigen nuevos obstáculos para el conservador proyecto interno y externo del segundo término de Bush, sobre todo por las asociaciones directas entre el indolente esfuerzo de socorro al Sur de su propio país y la guerra en Irak.⁷²

Katrina tendrá a corto y mediano plazo una severa secuela, al afectar la economía de tres estados, lo cual ha repercutido negativamente en el ámbito nacional. Como resultado, se ha producido un aumento de los costos del combustible, incremento en la inflación, un débil crecimiento en los empleos y los ingresos, una reducida actividad de la producción y la construcción, un desempleo más alto, y un encarecimiento del costo de la vida. A corto plazo, tal situación ha provocado una desaceleración del crecimiento económico previsto en el ámbito nacional, el cual se situará por debajo del 2% en los próximos dos trimestres del año.⁷³ Esta objetividad impactará negativamente al partido de la presidencia en las elecciones de Medio Término de noviembre de 2006.

⁷¹ Incluso con apoyo directo del Comando Norte de los Estados Unidos.

⁷² Craig Crawford, “Multiple Challenges Face Bush in the Aftermath of Katrina”, *CQ Politics Weekly*, Friday, September 2, 2005.

⁷³ Courtney Schlisserman y Joe Richter, “Se desacelera la economía de EEUU por el alto precio del combustible”; *El Nuevo Herald*, Sección: Moneda- Negocios, 1ro de septiembre de 2005, p. B03.

Como parte de las reducciones de las partidas económico-sociales del gobierno federal, la Administración Bush había recortado más de 71 millones de dólares al presupuesto del Cuerpo de Ingenieros de Nueva Orleans, una reducción de 44 %, y suspendió planes para fortificar los diques de esa ciudad y mejorar el sistema de drenaje del agua.⁷⁴ Esto fortalece la imagen de irresponsabilidad del gobierno federal, más allá de la ineptitud de actuar ante crisis nacionales.

La realidad económica, y lo que a veces en el acontecer norteamericano resulta aún más importante, es decir, las percepciones sobre la economía, que incluso antes de Katrina reflejaban una preocupación y descontento creciente del ciudadano medio norteamericano con el gobierno de Bush, será una variable trascendental, con la cual el equipo de manejo de crisis del Ejecutivo, tremendamente efectivo en el primer período presidencial, tendrá que lidiar, pero esta vez, pensamos, sin gran éxito.

En cuanto a la ética y la responsabilidad gubernamental con sus ciudadanos, un editorial del periódico mexicano *La Jornada* del 5 de septiembre concluía de brillante manera:

Si la guerra contra Irak, con todo y lo criminal y desastrosa que ha resultado, no ha logrado convencer al grueso de la ciudadanía estadounidense de la inmoralidad y la ineptitud que caracterizan al grupo gobernante, es posible que el desengaño se produzca como resultado de la no menos criminal negligencia de Bush y los suyos ante la catástrofe causada por “Katrina”.⁷⁵

Límites a la agenda de la administración Bush

El cometido de Bush, a la sombra de la ineficiencia de la prevención y la inadecuada ayuda gubernamental durante el drama causado por el huracán Katrina, viene a complicarse aún más. El sentimiento de abandono e ira contra la irresponsabilidad del gobierno federal hacia sus conciudadanos más pobres se mezcla con la desvergonzada utilidad que las grandes corporaciones como Halliburton empiezan a recoger a costa de la tragedia.⁷⁶ Esto se amalgama con los ya acuciantes problemas domésticos de tipo socioclasistas, las percepciones sobre el estado de la economía, particularmente respecto al tema del desempleo, el aumento de los precios del combustible y la inflación, así como un cuestionamiento creciente a la guerra en Irak y a los sucesivos escándalos de tortura.⁷⁷

⁷⁴ Roberto Bardini, “Reverencias e Irreverencias”; *Milenio*, Lunes 5 de septiembre de 2005, p.43.

⁷⁵ “Nueva Orleans, víctima de ‘Katrina’ y de Bush”; Editorial, *La Jornada*, lunes 5 de septiembre de 2005, p. 2.

⁷⁶ Simon Romero, “Houston Takes In The Hurricane Profits”, *New York Times*, September 9, 5 y *Halliburton Watch*, en Halliburtonwatch.org, September 9, 2005.

⁷⁷ El campo de prisioneros en Guantánamo ha sido caracterizado como el “gulag de nuestro tiempo”.

Tal contexto pudiera devenir en el punto de inflexión que otorgaría un mayor margen de maniobra, dentro del consenso establecido, al desmoralizado partido demócrata, —que inició el ciclo electoral congresional con casi nulas perspectivas de rescatar la mayoría de las bancadas en cualquiera de las dos cámaras del Congreso en los comicios de Medio Término de noviembre del 2006.⁷⁸ Desde el punto de vista estructural numérico, a los demócratas se les hace muy difícil rescatar la mayoría en ambas cámaras del Congreso. En la Cámara de Representantes a los demócratas les haría falta mantener todo sus actuales curules (203) y ganar 15 puestos adicionales, mientras que en el Senado tendrían que retener todos sus actuales escaños y lograr seis sitios adicionales. Tómese en cuenta que de los 33 asientos senatoriales sujetos al proceso eleccionario de 2006, 18 escaños serán defendidos por demócratas contra solo 15 republicanos, de los cuales solo tres estados votaron por Kerry⁷⁹ en los comicios presidenciales de 2004.

Sin embargo, desde el punto de vista político, los efectos de Katrina pudieran ser utilizados por los demócratas para salir de la fase de críticas sin opciones alternativas y entrar en una etapa ofensiva de proyección de sus propuestas sobre todo en lo que concierne a los temas socioeconómicos, y lograr un momento político favorable que les sirva de empuje para hacer un mejor desempeño en las elecciones de noviembre de 2006.

Los demócratas tendrían que centrar sus planes en el rescate del papel del estado, partiendo del hecho, que bien caracterizara la Senadora Republicana de Maine, Susan Collins, de que “... En su respuesta inicial a la catástrofe del huracán Katrina, particularmente en Louisiana, el gobierno fracasó a todos los niveles”.⁸⁰

El partido demócrata se vería precisado a rescatar viejos *slogans* del programa del *New Deal* y los programas de Bienestar Social del período rooseveltiano para reactivar, de un lado, el interés e importancia de los programas sociales federales para los sectores más desposeídos de la sociedad norteamericana; de otro, resucitar la imagen de ser el partido que representa, aunque sea en términos de maniquea conveniencia política, los intereses de las minorías y las clases bajas de la sociedad norteamericana. Para ello, tendrían que hacer dejación del legado clintoniano, y articular una estrategia concreta, que no tenían concebida hasta el día en que Katrina golpeó al Sur de los Estados Unidos, y que al cabo de dos meses del siniestro tampoco se observa este delineada.

En parte, esto se debe a que en el ámbito de la estructura política partidista, las dos facciones más obvias del partido demócrata se encuentran envueltas en una grave

⁷⁸ La Cámara de Representantes está compuesta en la actualidad por 231 Republicanos y 203 Demócratas; mientras que el Senado tiene 55 Republicanos, 44 Demócratas y un independiente.

⁷⁹ Nos referimos a los curules de Olympia Snowe (Maine), Rick Santorum (Pa) y Lincoln Chafee (R.I.).

⁸⁰ Erika Bolstad, Sarah Bahari y Martin Merzer, “New Orleans Sees Progress as Water Flows Out”; *The Miami Herald*, September 7, 2005, p. A01.

lucha interna. De un lado, se destaca la que dirige el Líder del Comité Nacional Demócrata Howard Dean, la cual mantiene la necesidad de rescatar el “alma y corazón” del partido, abogando por la defensa de los programas de Bienestar Social. De otro, la rama cohesionada alrededor del *Democractic Leadership Council*,⁸¹ la cual se esmera en mantener una posición política conservadora, pero que proyecta en lo social una cara más indulgente que las desmedidas propuestas republicanas, partiendo del criterio que el centro-derecha define toda la actual política del país.⁸²

Al margen de que demócratas y republicanos se yuxtaponen cada vez más desde el punto de vista político-ideológico, Katrina abre interrogantes como: ¿Poseerán los líderes del partido de la minoría el coraje y la voluntad política de convertirse en una verdadera oposición al Presidente de un país en guerra?; ¿Serán sus propuestas verdaderas alternativas capaces de capitalizar el momento político que se les brinda para rechazar el proyecto conservador extremo de la Administración Bush?; ¿Podrá el partido demócrata reavivar las fuerzas consistentes en un 46% (101 839 716)⁸³ de los ciudadanos con edad al sufragio que no asistió a las urnas en las pasadas elecciones presidenciales de 2004, y mantener a su favor el 48,10% que voto contra Bush⁸⁴? Más allá de las investigaciones e incluso sustituciones de burócratas de segundo nivel, ¿Se convertirá Katrina en el despertar del ciudadano medio norteamericano?; ¿Estaremos ante la presencia de un cambio en el debate político norteamericano, que se ajuste a las necesidades del sistema en la actualidad?; ¿Tendrán los demócratas la valentía de presentar un juicio político (*impeachment*) contra el Presidente Bush por incumplir con la promesa de proteger al país y mentir en cuanto a las causas de involucrar al país en una guerra?. Un pálido o tardío reaccionar por parte de los demócratas, basado en la cobardía política de sus líderes y en la ausencia de una concepción política contestataria, sobre todo en cuanto a la guerra en Irak y la proyección externa norteamericana, y la más pequeña de las consecuencias para su partido radicarán en su ausencia por muchos años de la Casa Blanca, y de las jefaturas en el Congreso Federal. Por el momento la pregunta es: ¿Existe el partido demócrata?

⁸¹ Donald Lambro, “Centrist Democrats Warn Liberals”, *The Washington Times*, April 4, 2005.

⁸² Tales desavenencias se patentizaron en la reunión nacional demócrata que tuvo lugar de 1ro al 3 de junio de 2005 en Washington D.C., la cual reunió a más de 1 000 activistas y líderes políticos.

⁸³ Se refiere a los ciudadanos en edad de votar y no a la población elegible para votar (203 864 860). La cifra de ciudadanos en edad de votar en el 2000 según el censo era de 193 376 975. El estimado de ciudadanos en edad de votar según cifras ajustadas del Censo de 2000 para las elecciones de 2004 fue de 221 285 099. http://elections.gmu.edu/Voter_Turnout_Notes.htm.

⁸⁴ De los 119 millones 445 383 que votaron en el 2004, favorecieron a Bush 60 841 129. Por el candidato demócrata Kerry votaron 57 453 966 y 1 150 288 otorgaron el sufragio por algún candidato de un tercer partido. <http://nationaljournal.com/members/campaign/>

A corto plazo, Katrina puede lograr la legitimación de la oposición partidista en función de bloquear determinadas medidas impulsadas por el “Presidente de un país en guerra” en esta etapa temprana del segundo período. Tal posibilidad situaría límites al ambicioso programa de la Administración tanto en términos prácticos como psicosociológicos.

La ausencia de logros significativos de la agenda de la Administración acuñaría la percepción de que la presidencia ya ha entrado en una etapa de “*lame duck*”, y, en consecuencia, ha perdido el dinamismo, la iniciativa y la capacidad para primar en la conformación de la política.

Tal escenario podría sumarse al creciente descontento respecto a la gestión presidencial de Bush que desde enero de 2005 se refleja en todas las encuestas de opinión pública norteamericana⁸⁵ y al cuestionamiento de su liderazgo ante crisis nacionales como quedó demostrado a raíz del desastre, resultante de los estragos del huracán.⁸⁶

Los republicanos moderados internacionalistas,⁸⁷ que no responden a posiciones sociales conservadoras, también pudieran convertirse en un escollo para el altamente ideologizante designio de Bush. Muchos de ellos están bajo la presión de su propia reelección en el 2006 o en el 2008, y aunque no resulta previsible que se opongan frontalmente al Presidente que es el Comandante en Jefe de las tropas estacionadas en el exterior, al mismo tiempo, se empieza a apreciar un distanciamiento de ellos respecto a las posiciones más disonantes de la Administración.

Los demócratas podrían aprovechar las fisuras existentes entre las filas republicanas. Con los conservadores fortalecidos por los resultados electorales,

⁸⁵ Véase cita 11. Para el 26 de agosto de 2005, el nivel de aprobación del público sobre Bush como Presidente era del 40%, el más bajo de toda su presidencia. Esta tendencia venía evidenciándose desde enero, pero ya en junio parecía irreversible. Para mediados de junio, el nivel de aprobación del desempeño presidencial era según la Associated Press-Ipsos de un 43 % (6-8/6/05), acorde con *Times/CBS* de un 42% (10-13/6/05) y Gallup destacó un 45% (24-26/6/05). Véase un estudio completo de las encuestas en realclearpolitics.com. A finales de agosto el 40% de aprobación constituía el por ciento más bajo recibido por parte de todos los presidentes norteamericanos desde la II Guerra Mundial en el verano siguiente a su reelección, con excepción de Richard Nixon el cual recibió un 34% en agosto de 1973, ya bajo la sombra del escándalo Watergate. Véase “Bush Approval Rating Continues to Drop”, *Gallup Poll News Service*, en <http://www.gallup.com/nl/?18148,AlertPE,8/26/2005>.

⁸⁶ El presidente ha recibido agudas críticas de que la respuesta del gobierno federal de la primera potencia del mundo fue poca y lenta ante la magnitud de la tragedia, y de que no estaba debidamente preparado para proteger al país. Además, se plantea que Bush esperó a que pasaran dos días tras la llegada de Katrina para regresar de sus vacaciones, las más largas que se tomó un presidente en toda la historia de los Estados Unidos.

⁸⁷ Nos referimos fundamentalmente a los senadores republicanos centristas como: Mike DeWine, (R-Ohio), Olympia J. Snowe (R-Maine) y Lincoln Chafee, (R-R.I), los cuales estarán sujetos al proceso electoral de 2006, y a Gordon H. Smith (R-Ore), John W. Warner (R-Va), Norm Coleman (R-Minn), Chuck Hagel (R-Neb) y Susan Collins (R-Maine), sujetos al proceso electoral en el 2008, coincidente con los comicios presidenciales.

algunos republicanos moderados se consideran al margen. Esto les brinda a los demócratas una oportunidad de dividir y conquistar, aunque su plan es tan desarticulado y contradictorio que ni siquiera se puede hablar de un proyecto contrapuesto perfilado. Su táctica se ha centrado en obstruir los planes de Bush donde ha sido posible, utilizando una maniobra de no formular diseños propios bajo la lógica de que el partido republicano, dado sus propios errores y horrores, implotará por sí mismo.

Otro factor a considerar es el hecho de que Bush no puede volver a lanzarse como candidato, y, en correspondencia, su control del partido podría reducirse después de los comicios de Medio Término de 2006. La competencia entre los futuros candidatos republicanos a las elecciones presidenciales de 2008 podría derivar en luchas intestinas como resultado de sus propias contradicciones internas.

Conjuntamente, el cuestionamiento oficial a la ética partidista republicana serviría como factor medular para que el partido demócrata pase de la defensiva a la ofensiva. El tema resurge cuando dos de los más vociferantes partidarios de Bush, y principales líderes partidistas republicanos en ambos hemisferios del Congreso Federal han sido centros de denuncias, vinculadas a la corrupción financiera. En el caso del Líder de la Mayoría Tom DeLay, puesto al cual renunció temporalmente,⁸⁸ la acusación oficial por conspiración criminal se basa en su actuación ilícita respecto al dinero de contribuciones para campañas electorales.⁸⁹ Por su lado, el actual Líder de la Mayoría en el Senado, Bill Frist, también enfrenta una investigación oficial sobre sus manejos financieros personales, emprendida por la

⁸⁸ Ha sido remplazado por el momento por el representante Roy Blunt, republicano por Missouri.

⁸⁹ DeLay ha aceptado enormes sumas de dinero de manos de los cabilderos corporativos en apoyo a sus ambiciones. Aceptó una contribución de \$56 500 dólares para una de sus fachadas de comités de acción política de manos de Westar Energy, Inc y a cambio, prometió a la compañía energética un “asiento a la mesa” con los que redactaron un importante proyecto de ley de energía. Además aceptó “un cheque de \$100 000 dólares de manos de una compañía de prisiones privadas” (la Corrections Corporation of America, o CCA, que posee prisiones privadas en Texas), violando una ley estadual electoral de Texas. En el 2004, el Comité de la Cámara para la Ética, dominado por los republicanos tuvo que reaccionar ante la oferta de \$100 000 que DeLay hizo al hijo del ex representante Nick Smith, Brad, que aspiraba a una curul en la Cámara. A cambio, Brad votaría a favor del proyecto de ley de medicamentos por receta de Medicare. El Comité de Ética reprendió a DeLay (*Roll Call*, 22/11/04). DeLay respondió sustituyendo al presidente del Comité. DeLay también dio un viaje en primera clase a Europa (\$4 285) a expensas del cabildero Jack Abramoff, que representaba los intereses de los casinos indios y de las fábricas de explotación de Saipán. A cambio, DeLay ayudó a derrotar el Proyecto de Ley de Prohibición del Juego en Internet al que se oponían los clientes de Abramoff. Por esas acciones, DeLay se encontró bajo investigación de fiscales federales y finalmente el 28 de septiembre de 2005 fue acusado por un jurado investigador de Texas de irregularidades en el financiamiento de sus campañas (*Washington Post*, 1-2 de marzo, 2005). Véase Saul Landau, “El eje Bush-DeLay del puro poder”, *Progreso Semanal*, Abril, 2005; “DeLay Indicted, Will Temporarily Step Aside”, *News Alert, National Journal*, Wednesday, September 28, 2005.

Comisión de Valores y Bolsa (SEC).⁹⁰ Estas procacidades socavan la imagen del partido republicano y subrayan la corrupción vigente, y simultáneamente ponen al descubierto la deshonestidad de los dos pregoneros más comprometidos con la “moralista” derecha religiosa en el Congreso.

Simultáneamente, el escándalo que rondaba a Bush a la llegada de Katrina, al conocerse públicamente que Karl Rove, principal asesor político del presidente, fue una de las fuentes en la filtración de la identidad de la agente encubierta de la CIA, Valerie Plame,⁹¹ pone en la picota pública la conducta de la Casa Blanca. Esto ha desatado un debate nacional sobre la protección de los agentes de inteligencia, la confidencialidad de la información, la libertad de prensa y el amparo de sus fuentes.⁹²

A manera de resumen

Katrina fue un fenómeno natural atmosférico previsible que resume un desastroso escándalo político para un gobierno que dedicó sus energías a reducir los programas socioeconómicos, a aumentar los gastos federales militares, en función de su unilateral aspiración global de dominación, y cuya proyección determinó, entre otros, la no-adhesión a la Convención de Kyoto.

Con su popularidad ya oscilando en los puntos más bajos desde que asumió la presidencia, el huracán y su lúgubre secuela han confrontado a Bush con su mayor reto interno desde los ataques terroristas del 11 de septiembre. El meteoro ha puesto

⁹⁰ La SEC autorizó una orden formal de investigación sobre la venta por parte de Frist de acciones de HCA Inc en junio de 2005, “HCA Says Federal Subpoena Is Likely Related to Frist Stock Sale”, *CQ Today MIDDAY Update*, Congressional Quarterly, September 23, 2005.

⁹¹ El escándalo de la agente Valerie Plame, que trabajaba para la CIA en asuntos de proliferación de armas nucleares, explotó cuando su nombre fue filtrado a la prensa desde la Casa Blanca al periodista Robert Novak, columnista pro Bush, para quitarle mérito al informe de su esposo el ex diplomático Joseph Wilson. Este, a petición del propio gobierno de los Estados Unidos había viajado a Níger en el 2002 y había descartado la posibilidad de que el gobierno de Saddam Hussein hubiese intentado compra uranio en ese país, argumentó que fue utilizado para justificar la agresión contra Irak. A raíz de una investigación sobre el caso, Matthew Cooper, reportero de la revista *Time*, declaró que Rove y I. Lewis Libby, jefe de gabinete del vicepresidente Dick Cheney habían hablado con él acerca de la esposa de Wilson en la semana de julio de 2003. Es un delito federal revelar el nombre de un agente encubierto de la CIA. Véase Joseph C. Wilson 4th, “What I Didn't Find In Africa”, *The New York Times*; Commentary, July 6, 2003, Section: Opinion, en [Http://Www.Nytimes.Com](http://www.nytimes.com); Carl Hulse And Richard W. Stevenson, “Democrats Want Ashcroft Out Of Inquiry”, *The New York Times*, October 3, 2003; Section: Debating A Leak: Questions Of Impartiality, en <http://www.nytimes.com>.

⁹² Walter Pincus y Jim Vandehei, “Prosecutor In CIA Leak Case Casting A Wide Net White House Effort To Discredit Critic Examined in Detail”, *The Washington Post*, Wednesday, July 27, 2005, Section: The Nation, p. A01; Robert Steinback, “‘Rovegate’ Sets the Spin Machine Awhirl”, *The Miami Herald*, Wednesday, July 20, 2005, Section: Editorials- Opinion, p. A23; David Johnston and Richard W. Stevenson, “Rove Reportedly Held Phone Talk on C.I.A. Officer”, *The New York Times*, Friday, July 15, 2005, p. A01; “Karl Rove, Whistleblower”; Editorial, *The Wall Street Journal*, Wednesday, July 13, 2005, p. A14.

una vez más en entre dicho su capacidad de liderazgo, previsión y preparación y ha roto los preceptos básicos de su conservadora agenda de política interna, externa y de seguridad.

Katrina y la economía han eclipsado la reforma del sistema de seguridad social y los impuestos, temas prioritarios en la agenda de Bush para su segundo mandato, y, de igual forma, han complicado aún más la pesadilla de la Administración en Irak.

Empero, George W. Bush seguirá durante los próximos tres años en la cúspide de una forma de gobierno, en el cual el Presidente encarna la representación de los Estados Unidos de América como hegemón mundial, y es a su vez el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas. Atacar a la máxima figura de un país en guerra, no importa que haya sido por opción y utilizando mentiras, pudiera provocar una crisis sistémica en un momento particularmente débil y altamente cuestionable para Norteamérica con daños que irían más allá de las diferencias partidistas y golpearían los cimientos mismos del sistema político y su proyección externa.

Este chantaje político en función de la defensa del sistema explica parcialmente el por qué de la inacción de los demócratas, los cuales en cuestiones esenciales comparten la misma filosofía y valores, y cuyas diferencias se dan en los márgenes de una política que se basa en el consenso. La ruptura del mismo en la década de los años 70 que sumergió a los Estados Unidos en la mayor crisis de credibilidad y legitimidad de su historia aún pesa en las consideraciones e intereses políticos del *establishment*.

Desde el púlpito presidencial, Bush aún tiene resortes para escudarse en la manipulada “lucha global contra el terror” bajo el concepto de una guerra interminable y permanente que amplía los márgenes para la manipulación del miedo y del patriotismo ciego. Paralelamente, si la Administración Bush se obstina en mantener un curso de acción que no atempere su ideológico e ideologizante proyecto, se dañarían paradójicamente intereses esenciales del poder público y se entraría en un preludio de crisis como resultado de las fuertes contradicciones intra e interclasistas presentes.

El sistema norteamericano se encuentra en una encrucijada. De un lado, a corto plazo, la visión de extrema derecha, fortalecida también ahora desde el sistema judicial, tratará de imperar en todos los órdenes de la vida política y social norteamericana. Sin embargo, el Presidente ha perdido empuje y forcejeará por dejar un legado neoconservador transformacional, a través de una propuesta que choca con el decursar histórico del realismo-pragmatismo, piedra angular de la política interna y de la proyección externa y de seguridad de los Estados Unidos de América, sobre todo con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial. La pregunta entonces es: ¿Qué línea de preminencia en la conformación de la política terminará por validarse? Quo Vadunt?